

La política en tiempos de la guerra sucia

Notas sobre la toma del Edificio de la Cruz Roja^(*)

MICHEL AGIER

Antropólogo
Director de investigaciones
en el Instituto de Investigaciones
para el Desarrollo IRD
(Marsella)
Francia.

Las guerras internas, las masacres y las violencias conducen a las poblaciones que logran escapar y se sienten amenazadas a desplazarse por miles hacia zonas situadas al margen de los espacios y de los cuadros sociales legales y previsibles. Al ubicarse en zonas de espera en la periferia de las ciudades o en campos de refugiados, los desplazados por la fuerza crean situaciones inéditas en las que la supervivencia física inmediata y la búsqueda de nuevos contextos de socialización son los dos imperativos de la movilización de los individuos y de las familias (o de lo que queda de ellas). Estas estrategias oscilan entre los excesos de un asistencialismo (debido a la intervención masiva y focalizada de organizaciones de las

Naciones Unidas y de las ONG internacionales) y los excesos de ilegalidad (en los vacíos que dejan esas intervenciones o en ausencia de ellas).

La acción política colectiva se va formando según pautas parecidas. La de los desplazados colombianos que se hizo visible hace apenas dos o tres años, surge en principio a partir de esas mismas necesidades extremas, sobrevivir física y socialmente y se desarrolla en los mismos ámbitos: la globalización y la ilegalidad.

Es lo que demuestra la acción desarrollada desde el 14 de diciembre de 1999 a raíz de la toma y ocupación de la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por varios centenares de despla-

^(*)El presente es el texto de la ponencia que el autor presentó al Coloquio Internacional La Société prise en otage, que se llevó a cabo en Marsella, en noviembre de 2000. La traducción es de Fernando Cubides, profesor de la Universidad Nacional.

zados que se apresuraron a denominar su acción "la toma del milenio".

Se estima en dos millones de colombianos (algo así como el 5% de la población total del país) la cifra de víctimas del desplazamiento forzado en el periodo comprendido entre mediados de la década del 80 y el año 2000 (según datos del COHDES, una ong conformada hace varios años para ocuparse del problema del desplazamiento). Un periodo que ha presenciado una intensificación de la guerra interna después de varios años de relativa calma. Los vínculos que se tejieron durante esta época entre el narcotráfico y los grupos armados (guerrillas y paramilitares o autodefensas) han ido autonomizando esta guerra sucia que mata indiscriminadamente en un país que a su vez tiene todas las apariencias de una antigua democracia política. Los contextos de estas luchas son territoriales y económicos en busca de la ocupación y expoliación exclusiva de los recursos de determinadas regiones –un control territorial que ha abarcado a un 40% del territorio nacional si tenemos en cuenta que cerca del 78% de los municipios tienen la presencia de al menos uno de los actores armados. La población, la mayoría de la cual no se identifica con ninguno de estos grupos, sufre sin embargo las consecuencias bajo múltiples formas, en particular como víctima de masacres, asesinatos selectivos, toma de rehenes, desplazamiento forzado, violencia generalizada y un terror que surge de la imposibilidad de preservar espacios y formas de sociabilidad neutros respecto de las redes y facciones en guerra¹.

Las poblaciones de desplazados arriban por lo general en pequeños grupos a las ciudades²: en principio a las más grandes: Bogotá, Medellín, Cali, pero también en la etapa más reciente a ciudades intermedias en las que la inserción puede hacerse en mejores condiciones.

En cuanto a Bogotá, se tiene una estadística de 320.000 desplazados que han llegado entre 1985 y 1998 (de los cuales, al menos 200.000 llegaron en los dos últimos años). Se han venido instalando de manera muy precaria en la zona periférica de Ciudad Bolívar y al llegar ésta al punto de saturación, en el municipio de Soacha. Bogotá es entonces el conglomerado urbano del país que ha recibido un mayor número de desplazados. Es precisamente de la periferia de Bogotá de donde se originó el movimiento de ocupación de la Sede de la Cruz Roja.

Muy temprano en la mañana del 14 de diciembre de 1999, quince personas provenientes de Soacha ocuparon la calle y la recepción del edificio de la Cruz Roja en el corazón de la *Zona Rosa*, un barrio central y "caliente" de la capital. En el curso de ese mismo día, el grupo se duplicó y quienes llegaban habían sido atraídos por la información transmitida por la radio y boca a boca. Pronto se instalaron en la calle construyendo pequeños refugios con plástico negro (cambuches) y a ellos se sumaron centenares de desplazados más en los días siguientes. Hacia la Navidad, diez días después se hablaba ya de 1.000 a 1.300 personas como ocupantes del edificio. Se fueron instalando con sus familias en los cuatro pisos de la construcción mediante una "violenta invasión" (como lo calificaban los comentaristas que citaban como prueba las puertas de vidrio rotas y algunos destrozos a la entrada). Vajillas, colchones y elementos de menaje doméstico muy variados, transformaron pronto las oficinas de la Cruz Roja en cocinas, dormitorios y comedores improvisados. Con posterioridad al asalto, el 5 de enero, se dio inicio a una ronda de negociaciones entre portavoces de los desplazados y representantes del gobierno colombiano (de la Red de Solidaridad Social, el organismo al que se le asignó

⁽¹⁾ Ver Daniel Pécaut "Colombia una paz esquivada" en: *Revista Colombiana de Sociología* Vol. V No. 2. Bogotá, 2000.

⁽²⁾ Aunque en los últimos años se han registrado grandes marchas de campesinos desplazados por la violencia que han llegado a equivaler a formas de protesta colectiva frente al conflicto.

directamente la gestión de los desplazados, pero así mismo de varios Ministerios y de entidades que tienen que ver con la Reforma Agraria y la cuestión urbana). Aún así el 8 de enero la policía tomó posiciones en torno al edificio, aisló a los ocupantes y cerró el tránsito callejero de los alrededores; se hizo un primer listado de los ocupantes y se instalaron barreras para controlar la entrada y salida: todo desplazado que saliera del campamento debía reingresar el mismo día o de lo contrario, ya no podría reingresar y a partir de allí los únicos que podrían mantenerse como ocupantes serían los ya registrados. Algunos de los ocupantes se confesaron "prisioneros de su propia ocupación".

Tras diez días de negociación, se firmó un primer acuerdo el 14 de enero del año 2000 en el que se preveía otorgar ayudas financieras de urgencia para hacer frente a los gastos de alojamiento y alimentación de estos ocupantes (tres meses de alquiler, el equivalente de tres meses de canasta mínima familiar y la garantía de la inscripción de sus hijos en las escuelas públicas). Al considerar que la negociación había concluido, los representantes del gobierno dejaron la mesa de discusión el 18 de enero, en tanto que los portavoces de los desplazados querían que se mantuviese y consideraron el retiro "como un acto de arrogancia inexplicable". Ellos querían que sus reivindicaciones a largo plazo también fueran consideradas y que no se circunscribieran las soluciones a las necesidades inmediatas. Identificaban dos tipos de necesidades: su reubicación y el inicio de "proyectos productivos".

Para entender bien esta ocupación y las negociaciones, es necesario recapitular algunos de sus antecedentes. Era por cierto para una parte de los ocupantes, la última de una serie de siete que había comenzado hacía año y medio, a mediados del año 1998: 1) con la toma de la iglesia de la Comunidad Religiosa de los Monfortianos (a donde acudieron para solicitar ayuda y a sabiendas de que habían curas de varios países y por ello, la ocu-

pación según afirmaba uno de los líderes, haría posible "la internacionalización del desplazamiento"). 2) ocupación de dependencias del Ministerio del Interior. 3) ocupación de dependencias de la Personería 4) de nuevo, ocupación de dependencias de l Ministerio del Interior. 5) ocupación de las oficinas de la Red de Solidaridad Social (en donde 180 familias obtuvieron, a instancias del Ministerio del Interior – Unidad de Derechos Humanos-, acceso a un programa piloto de proyectos productivos mediante una ayuda financiera de 3.5 millones de pesos) 6) sede del Alto Comisionado de la Cruz Roja del 2 al 20 de agosto de 1999 (ocupación en la cual 70 personas desde el interior y unas 400 desde el exterior, reclamaban igual tratamiento que los 180 beneficiarios de los proyectos productivos) y finalmente 7) el edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja, el 14 de diciembre.

En esta última ocupación, se formó entonces un grupo muy heterogéneo que incluía población que había participado en varias de las acciones antes mencionadas: los 180 de los "proyectos productivos" pedían el cumplimiento de la segunda parte de lo acordado en la ocupación de la Red de Solidaridad Social; 70 de los ocupantes de la Oficina del Alto Comisionado, pedían esta vez el mismo tratamiento y acceso a proyectos productivos, un grupo de unas 40 personas, se identificaban como "los no-certificados", es decir, a quienes se les había negado su certificación como desplazados y por último, un grupo que provenía de una invasión anterior en el municipio de Soacha. Cada grupo forma una "categoría" de desplazado y tiene su representante dentro de los 10 portavoces de la ocupación.

Después de la ruptura de las negociaciones, el 18 de enero se inició el cuestionamiento de la legitimidad de los desplazados y surgieron distintos argumentos: se discutió la representatividad de quienes habían negociado, a algunos de ellos se les atribuyeron vínculos con la guerrilla (por la que en verdad algu-

nos sentían simpatía política) o se les trató como cultivadores de coca o habitantes de la calle en Bogotá, a otros se les considero “falsos desplazados” o se los consideraba irresponsables o inexpertos como voceros.

Los medios de comunicación al igual que el resto de la población, oscilaban entre la compasión miserabilista frente a un espectáculo de necesidad extrema o la suspicacia hacia un sector de población sobre la que pesa un manto de sospechas: si han sido desplazados, lo han sido por haber estado próximos en algún momento a algunas de las organizaciones guerrilleras, a un grupo de paramilitares, o de traficantes de droga, etc. La Revista *Cambio* (dirigida por el escritor Gabriel García Márquez), puso en duda la veracidad de los relatos de los desplazados, en un momento en el que la ocupación era un hecho de actualidad. A fines de enero una crónica de la Revista trataba acerca de una mujer del grupo de participantes de la toma que había intentado el espectacular gesto de crucificarse frente a fotógrafos y periodistas. Se hizo sospechosa de dar versiones contradictorias sobre los motivos de su desplazamiento y fue identificada como una simple habitante de los tugurios dueña de un bar de prostitutas que además se habría beneficiado injustamente de una ayuda para proyectos productivos, madre soltera de cuatro hijos, desempleada y quien mostraba trastornos psicológicos. Al dar la palabra al responsable de la Red de Solidaridad Social, el artículo acogía el argumento de la confusión reinante, en la que según el funcionario “algunos se hacen pasar por desplazados y dañan la imagen de los que lo son realmente” y concluía: “así es que justos pagan por pecadores”. La oposición entre verdaderos y falsos desplazados, fue suscitando otros comentarios y rumores (se hablaba de la presencia de armas, drogas, disputas internas y de diferencias entre los negociadores, etc.).

A partir de allí, la ocupación va adquiriendo la apariencia de un campamen-

to: cambuches, fogones, fogatas, ropa secándose en las barreras policiales, niños jugando por doquier, adultos ocupados en fabricar pequeñas artesanías con los cables telefónicos arrancados a las instalaciones, etc.

A comienzos de febrero, el CODHES hizo un conteo, encontrando 250 personas dentro de las cuales había 176 jefes de familia. Se podía constatar una gran diversidad étnica y regional entre los ocupantes y el informe, destacaba que la mayoría estaba solicitando ser reubicada en la ciudad y descartaba la posibilidad de regresar a sus sitios de origen ante la falta de garantías para su seguridad.

Algunos otros hechos deberíamos señalar para concluir con esta descripción:

- El 24 y el 25 de marzo, representantes de esta ocupación -participaron en la reunión en la que se formó un Comité Nacional de Desplazados en Medellín

- El 15 de mayo se produjo un enfrentamiento entre los ocupantes y la policía. Se puso precio a la cabeza de algunos de los líderes, según decían los desplazados, se hablaba de 5 millones de pesos por el principal de los portavoces, del que se decía ser próximo a las FARC y de 2 millones por los demás, según los mismos rumores;

- El 19 de mayo los desplazados se retiraron de los pisos del edificio que no pertenecían al CICR, reagrupándose en los dos pisos que habían ocupado en principio;

- A fines de mayo se desocupa la calle, al término de una acción de tutela adelantada por la Alcaldía, se reabre la circulación del tráfico normal y disminuye el número de ocupantes (quedando sólo algunas docenas de ellos) y a partir de allí, la situación, en cuanto a la cifra de ocupantes se mantiene estacionaria hasta el presente;

- En el mes de junio, representantes de la ocupación de la Cruz Roja intervienen en la Mesa Temática que se lleva a cabo en el Caguán entre las FARC y el gobierno, cuyas discusiones son retransmitidas en una cadena pública de televisión;

- Por fin, a comienzos de julio se produce un encuentro en el lugar con los desplazados de la Hacienda La Miel del Departamento del Tolima, que fueron los primeros en ocupar un organismo público (el INCORA) para obtener un espacio para su reubicación fuera de sus lugares de origen.

PARA CONCLUIR, PROPONEMOS TRES PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN:

En primer lugar, es mediante la acción política en busca de objetivos vitales que comienza a constituirse la identidad social del desplazado y a diferenciarse de los actores armados que hasta ese momento venían siendo considerados como los únicos sujetos políticos del conflicto. La formación de la Coordinación Nacional de Desplazados es desde ese punto de vista, muy interesante, pues al aparecer como sujeto político, de manera tan inesperada como lo son sus reivindicaciones, es que la "comunidad de desplazados" comienza a ser visible para el resto de la sociedad. Los relatos de las masacres se hacen entonces comprensibles y se socializan como parte de este reconocimiento. El conjunto de secuencias que permite formar una "identidad existencial" (y usamos la expresión de Michael Pollak), se amalgama y una comunidad de destino se hace concebible para cada uno. La toma de palabra que se lleva a cabo entonces, nos conduce al campo político a la vez que es parte de la constitución de esa identidad que había sido imposible hasta ese momento. Los amenazados, fugitivos y sobrevivientes encuentran un sentido a su experiencia en la identidad política de *desplazados*.

En segundo lugar, en su propia "impureza", en su estado avanzado de degradación social, esta población representa la sociedad civil *en el estado*, poco conforme con el sueño de una sociedad civil inocente y sin nexos con los conflictos. Varias oleadas de violencia y de desplazamiento forzoso, al cabo de sucesivos periodos de guerra interna, han entrañado

en Colombia un nivel avanzado de desestructuración social en el largo plazo. La adaptación a la violencia, la impunidad de la violencia política, y los vínculos reales entre violencia política, narcotráfico y delincuencia social, hacen la situación más compleja y demás difícil resolución. Por ello, la acción que acabamos de relatar ha suscitado reacciones tan encontradas, al fin de cuenta, los desplazados han parecido indignos de considerarse como actores políticos puesto que ni respetaban las reglas de la negociación ni actuaban como un "movimiento social" corriente, han sido confusos, heterogéneos y sobre todo, sospechosos de llevar consigo mismos las causas que los han conducido al desplazamiento. Sin embargo, no hay razón para sorprenderse porque la acción política de los desplazados, adquiera formas inesperadas, imprevisibles, ilegales al igual que "globalizadas" puesto que esas son precisamente las características de la situación a la que ellos se han visto reducidos. Es en medio de esta guerra sucia, que se están formando las condiciones de la paz.

Por último, la confrontación social que se ha llevado a cabo en medio de la ocupación de la Cruz Roja, retrata lo que ocurre en el país: "Dos Colombias antes lejanas se miran día tras día, de frente" titulaba una revista (Diners, 16/05/2000). ¿Puede surgir de este extraño encuentro una toma de conciencia acerca de un presente nacional común?. Las formas altamente simbólicas y dramatizadas que adquirieron la palabra de los desplazados y sus gestos (crucificarse, acostarse en la mitad de la vía, llorar frente a las cámaras, poner los niños en primer plano) testimonian a la vez el mutismo político que impone la violencia y un intento de emancipación y de expresión en un espacio común, de iguales. Un intento que tal vez se agote y sea efímero, pero que se añade a decenas de otros para encontrar un intersticio político frente al sistema bloqueado del bipartidismo oficial y a la dramática polarización de la guerra que libran guerrillas y paramilitares.